
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ESCUELA DE DERECHO

REVISTA
DE
DERECHO

SEGUNDA EPOCA

AÑO XXXIX — Nº 156 — MAYO - AGOSTO DE 1971

Director

JUAN ARELLANO ALARCON

Sub-Director (interino)

RENATO GUZMAN SERANI

EDITORIAL JURIDICA DE CHILE

Casilla 4256 — Santiago de Chile

CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Señor Ministro:

Señor Presidente Asociación Empleados
Judiciales:

Señor Director Escuela de Derecho:

Señoras - Señores:

Con fecha 26 de agosto del año en curso, se firmó en Santiago un Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Concepción (Escuela de Derecho). Este Convenio obedece a las nuevas políticas de nuestra Universidad y en especial de la Escuela de Derecho, en orden a prestar a la comunidad los servicios que sus necesidades requieren.

En dicha oportunidad, el Sr. Rector don Edgardo Enríquez F., se refirió en los siguientes términos a la trascendencia del acto:

En representación de la Universidad de Concepción he tenido el honor de firmar el presente Convenio con el Gobierno de la República representado en esta ocasión por el Sr. Ministro de Justicia, Dn. Lisandro Cruz Ponce.

Ha dicho Brehier que "la Universidad, como fenómeno social, desde su origen representa una aspiración de autonomía con respecto a la autoridad civil o eclesiástica".

Nuestra Casa de Estudios se ha caracterizado por el celo con que ha exigido el respeto a su autonomía. Ante una agresión gubernativa sufrida hace dos años, los universitarios de Concepción reaccionamos

en forma viril y decidida. Para evitar la repetición de semejante atropello iniciamos una fuerte campaña destinada a obtener que el fuero tradicional de que habían gozado las universidades chilenas quedara garantido por medio de una ley. Hace pocas semanas, S. E. el Presidente de la República Dr. Salvador Allende ha promulgado el Estatuto que reconoce este derecho fundamental para el libre quehacer universitario.

Un observador superficial y no advertido, pudiera ver una contradicción entre lo que dijimos y defendimos ayer, y lo que acabamos de firmar hace unos momentos. Estaría errado, porque este compromiso que voluntariamente suscribimos con el Ministerio de Justicia no menoscaba nuestra independencia, sino que nos permitirá colaborar con el Supremo Gobierno en estudios e investigaciones sobre aspectos relativos a la administración de justicia y asistencia jurídica en los sectores marginales de la población urbana, como también en la preparación de anteproyectos destinados a mejorar y agilizar los procedimientos judiciales. Nuestra Escuela de Derecho no quedará sujeta a marcos rígidos sino que tendrá a su cargo la dirección y ejecución de estos programas. No sólo está pues, perfectamente resguardada la total autonomía

universitaria, sino que, además, se está dando estricto cumplimiento a nuestros Estatutos que nos exigen hacer aportes efectivos al proceso del cambio social. Cuanto se haga para perfeccionar la administración de justicia, especialmente para los sectores más pobres de nuestro pueblo, como son los que viven en las poblaciones marginales, será de positivo beneficio y factor indiscutible de bienestar colectivo.

Fué en atención a estas consideraciones que el Consejo Superior de la Universidad de Concepción prestó su unánime aprobación al interesante Convenio que, repito, he tenido el honor de firmar con profundo agrado y al hacerlo, cumplo con el deber de manifestarle, Sr. Ministro, que puede Ud. estar cierto de que la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción se preocupará en forma muy especial de cumplir responsable y cabalmente el compromiso que ha adquirido con el Supremo Gobierno y con el pueblo de Chile.

Se trata de la más antigua Escuela Universitaria del Sur del país. Nació hace 106 años como Curso Fiscal de Leyes anexo al Liceo de Concepción. Por sus aulas pasaron alumnos y profesores que llegaron a ser distinguidos ciudadanos, parlamentarios, educadores y servidores públicos. Mucho de lo que era Concepción en lo cultural a principios de siglo, se lo debe a su vieja Escuela de Derecho. Entre los fundadores de la Universidad de Concepción, figuran sus catedráticos y fueron sus alumnos quienes más se destacaron en la campaña destinada a movilizar voluntades y obtener los dineros indispensables.

En 1928, el Fisco, preocupado de producir economías al Erario Nacional, acordó suprimir los modestos aportes que permitían pagar sus profesores y dos auxiliares. Fué entonces cuando la acogió la Universidad de Concepción. Todos sus alumnos y su Cuerpo Docente, pasaron a formar

parte de la Corporación que habían contribuido a formar y desarrollar.

Hoy día vemos cómo esta Escuela, en cuyas aulas se discutieron los viejos Códigos que, con algunas modificaciones, todavía nos rigen, y donde se sostuvieron acalorados debates sobre la procedencia y justicia de las leyes de cementerios laicos, registro civil, educación primaria obligatoria, etc., está preocupada de hacer investigaciones que pongan a tono con las circunstancias actuales, las disposiciones legales, los procedimientos judiciales y la administración de justicia.

Mucho se ha hablado aquí y en el extranjero de la necesidad de estimular la formación de técnicos y profesionales relacionados con la producción de bienes materiales. Más ingenieros y menos abogados ha sido la consigna. No comparto totalmente esta opinión. Pienso que, indudablemente debemos producir mayor cantidad de personas técnicamente capacitadas para lograr el progreso y desarrollo material del país, pero, a condición de no descuidar por ningún motivo, la formación de los especialistas que han de dictar, modificar, perfeccionar, las leyes y reglamentos que rigen nuestras relaciones como seres humanos.

El respeto a la ley es un principio democrático que no debe perderse. Pero ¿A qué ley? ¿A la que, en el siglo pasado, por ejemplo, permitía y reglaba la esclavitud y castigaba en forma cruel al esclavo que se escapaba?

La ley, lo dice un principio jurídico, debe ser actual. Cuando deja de serlo, empieza a ser burlada en forma abierta o disimulada.

Baste recordar cómo, la falta de una justa ley de divorcio, ha dado origen en Chile al subterfugio de las nulidades matrimoniales que están creando problemas más graves que los que se pretende evitar.

La actualización de las leyes es pues, otro principio democrático que tampoco puede olvidarse o postergarse.

Hacia ese objetivo está destinado el Convenio que acabamos de suscribir. Enormes serían las dificultades que tendría que afrontar el Gobierno en el cumplimiento de su programa, si no se preocupara de modificar las leyes que fueron dictadas en el pasado para una sociedad distinta a la que ahora se desea y que permitieron la perpetuación de situaciones injustas que hoy día aparecen inaceptables.

Es en atención a estas consideraciones que, insisto, la Universidad de Concepción considera de alto interés la firma de este Convenio y agradece al señor Ministro de Justicia que haya dado los pasos necesarios para hacerlo realidad.

He dicho

CONVENIO

En Santiago, a veintiseis de agosto de mil novecientos setenta y uno, don LISANDRO CRUZ PONCE, por el Ministerio, y don EDGARDO ENRIQUEZ FRÖDDEN, por la Universidad de Concepción, vienen en celebrar el siguiente Convenio:

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Justicia se encuentra abocado a estudios relativos a las necesidades de la administración de justicia en las poblaciones;

Que en igual forma se hace necesario realizar estudios e investigaciones tendientes a lograr la modernización de la legislación y consecuente agilización de la administración de justicia, entre ellas las que dicen relación con reformas a los procedimientos judiciales;

Que, persiguiendo análogas finalidades es necesario propender al perfeccionamiento sistemático de los empleados del Poder Judicial;

Que el Ministerio de Justicia no dispone de personal técnico suficiente para desarrollar las investigaciones y tareas de perfeccionamiento que las necesidades antes señaladas suponen;

Que la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción contempla, entre sus tareas académicas, actividades relacionadas específicamente con los propósitos antes señalados, habiendo ya iniciado investigaciones atinentes a las materias antes señaladas, dictado Cursos de Perfeccionamiento para empleados del Poder Judicial y programado la labor a desarrollar en beneficio de las poblaciones a través de los Centros Jurídico-Sociales, y contando además, con personal y elementos altamente calificados para realizar las investigaciones y trabajos antes descritos; y

Que es propósito de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción colaborar con el Supremo Gobierno en las tareas antes señaladas.

ACUERDAN:

1º.— Que la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción se obliga desde ya a realizar las siguientes actividades:

a) Atención y asesoría jurídica en poblaciones de Concepción en materias laborales, comunitarias o de cualquier índole;

b) Estudios relativos a la codificación de procedimientos especiales contemplados en el Código de Procedimiento Civil, y

c) Cursos de Perfeccionamiento para empleados del Poder Judicial.

Se deja constancia que la Escuela de Derecho ya ha iniciado los trabajos señalados en las letras precedentes a partir de la firma del presente convenio y deberá entregar los informes finales a más tardar el 31 de marzo de 1972.

2º.— El Ministerio de Justicia se obliga a proporcionar recursos hasta por la suma de E\$ 100.000 para la realización de los estudios y cursos a que se refieren las letras a), b) y c) del Nº 1 del presente acuerdo. El pago de la suma indicada se hará de la siguiente forma:

a) E\$ 40.000, a la fecha de encontrarse totalmente tramitado el Decreto que apruebe el presente Convenio;

b) E\$ 40.000 al 30 de octubre de 1971, y

c) El saldo de E\$ 20.000 a la fecha de la entrega de los informes finales a que se refiere la cláusula primera del presente convenio.

La suma estipulada no será alterada ni reajustada en ningún caso.

3º.— El presente Convenio entrará en vigencia desde el momento en que el Decreto a que dé lugar ingrese totalmente tramitado y aprobado a la Oficina de Partes del Ministerio de Justicia.

4º.— Las partes que suscriben el presente Convenio acuerdan además, que, en el caso que de común acuerdo para continuar adelante con los Cursos para el Poder Judicial, con la Asesoría Jurídica a las poblaciones de que trata este convenio y aún más incorporar otro tipo de investigaciones a las ya señaladas, bastará la sola manifestación concordante de ambas partes para que se estime ampliado por el plazo que en este caso se acuerde y en las condiciones que se fijarán en la manifestación de que se trata; siendo dicho acuerdo suficiente para la tramitación del decreto respectivo, y

5º.— Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

LISANDRO CRUZ PONCE
Ministro de Justicia

EDGARDO ENRIQUEZ FRÖDDEN
Rector de la Universidad de Concepción